

MANIFIESTO

ASOCIACIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Abordamos el proceso de transición energética desde el punto de vista de ciudadanos, preocupados por los costes de la energía, la situación de dependencia energética de nuestro país y la escasa transparencia del actual sistema. Igualmente, desde una posición de personas interesadas en participar y colaborar en los planes de futuro para este sector clave para cualquier desarrollo. En este sentido, creemos que la posición de España ante el consenso de los socios europeos (la cual se reflejará en el texto definitivo del PNIEC a partir de esta consulta pública), debe estar basada en la capacidad real que tiene en este momento nuestro país para hacer una reconversión energética de sus estructuras económicas y sociales, de manera que no suponga una elevada carga que lastre el crecimiento económico y el desarrollo social. El plan de transición energética español tiene que estar por encima de intereses espurios y consideraciones particulares de grupos de presión y se tiene que centrar en dos puntos fundamentales: como disponer de energía necesaria o suficiente en cada momento, a un precio competitivo para las empresas y asumible para el conjunto de la ciudadanía y cómo disminuir el aporte a la atmósfera de gases de efecto invernadero.

Por ello, es necesario un equilibrio formado, por un lado, por el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel europeo e internacional y, por otro lado, asegurar siempre y en todo momento el suministro energético al menor coste posible, tanto para el consumidor, como para el sistema en su conjunto. Debemos, por tanto, conciliar los deseos y máximas consensuados en los organismos internacionales con la realidad de un país como España que para seguir creciendo necesita de más energía sin dañar ni la competitividad de las empresas ni el bienestar de los ciudadanos. En ningún caso esto puede ser tomado como una disyuntiva que obligue a asumir un menor crecimiento y bienestar con tal de cumplir los objetivos de cambio climático y des-carbonización de la economía. Es, y debe ser, compatible hacer una cosa y la otra, más aún estando en medio de una revolución tecnológica, la cual no podemos hipotecar y frenar porque en ello se juega nuestro futuro. Cumplir con los objetivos señalados debe entenderse con el cumplimiento de los plazos que se han señalado y sin que suponga una carrera por llegar los primeros a su cumplimiento.

Desde el punto de vista del ciudadano, la política energética no es un fin en sí misma sino una pieza más del engranaje socioeconómico que permite avanzar a las sociedades, especialmente en el mundo desarrollado. A juicio de nuestra Asociación, la energía es una palanca de crecimiento y un brazo articulador de actividad económica en los territorios y en los sectores y, por tanto, al tratarse de un insumo básico, es necesario buscar soluciones coste eficientes, que tengan en cuenta todos los costes, incluidas las externalidades (tanto sean estas positivas como negativas), y respetando el principio de neutralidad tecnológica, para incorporar un mayor valor añadido a la cadena de producción y, por tanto, redunde en mayores beneficios tanto para las empresas como para los consumidores.

Así, las políticas energéticas, medioambientales y de lucha contra el cambio climático, son los ejes sobre los que se desarrollará la evolución hacia una economía des-carbonizada y circular, pero sin perder de vista que tendrá que atender a mayores necesidades reales de suministro energético debido al consumo exigido por diferentes elementos que componen la actual “revolución digital”: blockchain, internet de las cosas, inteligencia artificial, *big data*, movilidad urbana... Es decir, las claves de futuro para las próximas décadas y probablemente muchas más que hoy ni imaginamos pero que con la velocidad a la que transcurre el cambio tecnológico estarán muy pronto presentes y será preciso desarrollarlas.

Las últimas estimaciones apuntan a una sociedad digital intensiva en energía y con una reconfiguración notable de la distribución geográfica de la demanda de energía. Según los últimos datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el consumo energético se incrementará en un 25% hasta 2040, lo cual requerirá un incremento exponencial de las inversiones a razón de 2 billones de dólares cada año. Esto no podrá salir de otro lugar que, del progreso de familias y empresas, incluso aunque se movilicen fondos por parte del sector público. Con lo cual un documento como el PNIEC debe partir de este escenario probable para evitar una falta futura de recursos. Dicho de otra forma, no es aceptable asumir una tesis de “estancamiento secular” como la que plantean algunos grupos de opinión. La transición energética tendrá que ser sostenible económicamente y si no, simplemente no podrá hacerse.

Por tanto, sabiendo que se necesita más crecimiento económico y no menos, es como mejor se puede construir una estrategia energética autofinanciada a lo largo del tiempo que redunde en un mayor progreso social. Dicha estrategia debe contar con todos los actores económicos potenciando la investigación y no privilegiando unas posiciones sobre otras, (es decir), respetando el principio de neutralidad tecnológica. Tal como está planteado este texto sometido a consulta, la Asociación considera que no se está respetando. Si bien es incontestable la necesidad de más energía renovable (la IEA estima un 40% de mix de generación basado en renovables para 2040), es discutible excluir categóricamente otras fuentes de energía que puedan ser eficientes y limpias y otras que incluso teniendo emisiones de gases contaminantes las han reducido de forma sustancial gracias al progreso tecnológico.

El PNIEC es mucho más ambicioso que el Marco de Energía y Clima de la Unión Europea a 2030 en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en la penetración de energías renovables y en la eficiencia energética de España en 2030. Concretamente, la reducción de emisiones de CO₂ en 2030 en un 20% respecto de 1990 implica reducir en 37 puntos porcentuales el nivel actual de emisiones de GEI en España. Por su parte, los objetivos propuestos de energías renovables (42%) y de eficiencia energética (32,5% pudiendo alcanzar un 39,6%) también superan a los objetivos comunitarios (del 32% y del 32,5%, respectivamente) acordados recientemente en el citado Marco de Energía y Clima de la UE a 2030. Este nivel de ambición implicaría, de prosperar, un sobreesfuerzo para España en comparación con los demás Estados miembros de la UE para el cumplimiento de los objetivos comunitarios, dañando potencialmente e irremediabilmente la competitividad de la economía española.

Desde la óptica ciudadana, tomar partido desde el primer momento discriminando a unas fuentes de energía frente a otras nos puede llevar a volver a cometer errores del pasado. No sería razonable que España tome partido por energías poco maduras y en pleno proceso de transformación tecnológica que le lleve otra vez a pagar otra curva de aprendizaje, esta vez en el segmento de descarbonización y reconversión del mix de generación eléctrica como ocurrió con el desarrollo de las energías renovables, el cual acabó con un agujero en el sistema eléctrico nacional de más de 30.000 millones de euros que ha sido financiado por los consumidores de energía.

En plena “curva de aprendizaje” es tentativo sobre-invertir y pensar que en lo que se está invirtiendo va a ser lo mejor, cuando pocos años después es posible que aparezca en el mercado una tecnología que nada tiene que ver, que es más eficiente y que además es económicamente más rentable. Es lo que lleva sucediendo desde hace décadas en las comunicaciones y el desarrollo de internet, al igual que en otros sectores. No es socialmente aceptable que un Gobierno destine inversiones a proyectos con un elevado riesgo de obsolescencia en un plazo corto de tiempo.

Preseleccionar unas energías frente a otras o incluso obligando a planes precipitados de cierre de actuales centrales que juegan un papel relevante de control de los precios de consumidores y empresas, es un riesgo que España no debería correr. Por ello, creemos que es adecuado adoptar una postura realista y prudente, creando un marco regulatorio estable y predecible que permita que las diferentes tecnologías se desarrollen y, a partir de ahí, ir realizando la transición hacia un menor volumen de emisiones y mayor cuidado del medioambiente, siendo catalizadores de una mayor actividad económica.

Así, creemos que la política energética es un pilar básico de la política industrial por lo que es preciso que la transición se realice de manera equilibrada, protegiendo la competitividad de nuestro tejido productivo a lo largo del proceso con un coste energético razonable y competitivo con respecto a los socios europeos. En este sentido, la política energética es inseparable del diseño y ejecución de políticas industriales en sectores como el automóvil (importante punto a destacar es el desarrollo del coche eléctrico y autónomo, junto con la reforma del modelo de movilidad urbana en las grandes ciudades europeas), la agricultura, las infraestructuras o los servicios urbanos, entre otros. Mención especial merece el papel que la energía juega en la reconversión de las zonas más afectadas por la desaparición de la explotación de combustibles fósiles o de centrales de producción de energía eléctrica. En este sentido, es imprescindible buscar soluciones de mercado que permitan reconvertir la actividad de las zonas por proyectos realistas, inteligentes e inclusivos como puede ser la inversión en tecnologías renovables en las mismas zonas afectadas por la transición energética.

En suma, los objetivos de cambio climático y transición energética en el contexto actual y futuro nos exigen ser responsables y comprometidos con la reducción de emisiones, pero el éxito residirá en la sostenibilidad económica y social a la hora de alcanzarlos. A este respecto, los ciudadanos somos conscientes de que este reto no puede dejar a un lado el de mantener la competitividad de las empresas y un suministro a coste asumible para los hogares. Hay que abordar los dos retos de forma conjunta e intentar que se refuercen mutuamente. Esto solamente se puede conseguir con un diálogo no partidista, en el que participen todos los actores, no sólo los del sector sino del conjunto de los ciudadanos, empresas y resto de sectores del país.